

EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO
XCV

OAXACA DE JUAREZ, OAX., OCTUBRE 18 DEL AÑO 2013.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO

SUMARIO

DECRETO NÚM. 2055. - P.N.V. DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA.....**PAG. 2**



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

LIC. GABINO CUÉ MONTEAGUDO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A SUS HABITANTES HACE SABER QUE, CONFORME A LO ORDENADO POR LA SOBERANÍA CONSTITUCIONAL EN EL DECRETO NÚM. 2055 Y DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN SEGUNDA Y LA ÚLTIMA PARTE, DEL PÁRRAFO PRIMERO, DE LA FRACCIÓN VI, DEL ARTÍCULO 53, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, QUE ESTABLECEN LAS FACULTADES DE VETO AL PODER EJECUTIVO Y DE PROMULGAR Y PUBLICAR LA PARTE NO VETADA, HASTA EN TANTO EL CONGRESO DEL ESTADO RESUELVA LAS OBSERVACIONES PENDIENTES, POR LO QUE OBEDECIENDO EL MANDATO CONSTITUCIONAL, TENGO A BIEN PUBLICAR LAS PARTES NO VETADAS, DEL CITADO DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA REFORMA A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

DECRETO 2055

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, reforma la numeración cardinal de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; el primer párrafo y la fracción V del artículo 1; el artículo 2; las fracciones II, IV, V y VI del artículo 3; las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 6; el artículo 7; el primer párrafo del artículo 14; el primer y segundo párrafos del artículo 21; el primer párrafo del artículo 24; el segundo párrafo del artículo 27; el artículo 28; el primer párrafo del artículo 40; el artículo 42; el artículo 43; el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 44; las fracciones I, II y III del artículo 46; el artículo 47; el artículo 48; el artículo 49; el artículo 50; el artículo 51; el artículo 53; la denominación del TÍTULO CUARTO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CAPITULO I PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO, OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO Y SUJETOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; el artículo 55; el primer párrafo y las fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV del artículo 56; la denominación del CAPITULO II DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS; el artículo 57; el artículo 58; el primer párrafo y la fracción I del artículo 59; el artículo 60; el artículo 61; el artículo 62; el primer párrafo del artículo 63; el primer párrafo del artículo 64; el primer, segundo y tercer párrafos del artículo 65; el artículo 66; el artículo 67; el artículo 68; el artículo 69; el artículo 70; el artículo 71; el primer y último párrafos y la fracción II del artículo 72; el artículo 73; la fracción VII del artículo 74; el artículo 75; el artículo 77; el artículo 78; el artículo 79; el primer párrafo del artículo 80; el artículo 81; la denominación del CAPÍTULO III DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS RESARCITORIAS; el artículo 82; el artículo 83; el artículo 84; el artículo 85; el artículo 86; el artículo 87; el artículo 88; el artículo 89; el artículo 90; el artículo 91; el artículo 92 y la denominación del TÍTULO QUINTO CAPÍTULO ÚNICO DE LA INDEMNIZACIÓN POR REPARACIÓN DE DAÑOS A CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; se adicionan las fracciones VII y VIII del artículo 3; las fracciones VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 6; las fracciones IV, V, VI, VII, VIII y un último párrafo al artículo 44; el artículo 47 Bis; el artículo 48 Bis; el artículo 48 Ter; el artículo 49 Bis; el artículo 50 Bis; las fracciones XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII y LIII y un último párrafo al artículo 56; el artículo 56 Bis; el artículo 70 Bis; el artículo 70 Ter; el artículo 70 Quater; el artículo 70 Quinquies; un último párrafo al artículo 74; el artículo 79 Bis; el artículo 83 Bis; el artículo 85 Bis y el artículo 93; y se derogan los artículos 54 y 76, de la LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA, para quedar como sigue:

Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en materia de:

I a la IV.-...

V.- Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del enjuiciamiento penal de los servidores públicos que gozan de protección constitucional, así como de la revocación de mandato del Gobernador; y

VI.-...

(El artículo 2, fue observado por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio lechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

Artículo 3.-...

I.-...

II.- La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

III.-...

IV.- El Poder Judicial del Estado, en los términos que marca la Constitución, esta Ley y demás normatividad aplicable.

V.- La Auditoría Superior del Estado, los Tribunales Especializados y los Órganos Autónomos del Estado.

VI.- Los ayuntamientos de los Municipios del Estado.

VII.- Serán autoridades competentes los Órganos de Control Interno a que se refiere la fracción III del artículo 6 de la presente Ley, quienes estarán facultados para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, de los procedimientos y recursos establecidos en esta Ley; y

VIII.- Los demás órganos que determinen las Leyes.

Artículo 4.-...

Artículo 5.-...

Artículo 6.-...

I.- Ley: a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca;

II.- Contraloría: a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca;

(La fracción III del artículo 6, fue observada por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio lechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

(La fracción IV del artículo 6, fue observada por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio lechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

en los Poderes Legislativo y Judicial y en los Órganos Autónomos del Estado, a los Contralores Internos o equivalentes o al órgano que determine su respectiva Ley Orgánica;

V.- Salario Mínimo: el salario mínimo diario vigente en el Estado;

VI.- Obsequio: todo bien y/o servicio que reciban y/o gocen con motivo de sus funciones los servidores públicos, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 4º grado;

VII.- Auditoría: la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca;

VIII.- Dependencias: las contempladas en la fracción I del artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca;

IX.- Entidades: las contempladas en la fracción II del artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca;

(La fracción X del artículo 6, fue observada por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

XI.- Instituciones públicas: la Administración Pública Estatal, los organismos que conforman los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y los Municipios; y

XII.- Poderes: al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

(El párrafo primero del artículo 7, fue observado por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

El Gobernador del Estado, durante el ejercicio de su cargo sólo será responsable por delitos graves del orden común y por violación expresa al artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, sin perjuicio de la responsabilidad política que se consigna en los términos del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 8.-...

...

I a la VIII.-...

...

Artículo 14.- Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular por escrito denuncia ante el Congreso del Estado, por las conductas a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, ofreciendo, en su caso, aquellas pruebas que por su naturaleza necesiten de determinado plazo para su presentación; presentada la denuncia y ratificada dentro de tres días naturales, el Presidente del Congreso turnará aquellas con la documentación que la acompañe a la Comisión Instructora, para que dicamine si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el precepto citado y si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, así como si la denuncia es procedente y por lo tanto amerita la incoación del procedimiento.

Del Artículo 15 al Artículo 20 ...

Artículo 21.- Una vez emitidas las conclusiones a que se refieren los artículos precedentes, la Comisión Instructora las entregará junto con el expediente al Diputado Secretario del Congreso o Diputación Permanente, para que le dé cuenta al Presidente de la misma, quien dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción del expediente anunciará que dicho Congreso debe reunirse en pleno como Gran Jurado de sentencia y resolver sobre la imputación de la comisión instructora y señalará día y hora en que se erigirá en jurado de sentencia, reunión que deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes a la declaración formulada por el Presidente.

El Diputado Secretario del Congreso o Diputación Permanente, notificará al denunciante y al servidor público denunciado, el día y hora en que el Congreso del Estado se erigirá en Jurado de sentencia. Así mismo los emplazará para que se presenten ante el Congreso erigido en Jurado, con el objeto de formular alegatos respecto a las conclusiones emitidas por la Comisión Instructora.

Del Artículo 22 al Artículo 23 ...

Artículo 24.- Cuando se presente denuncia o querrela por particulares bajo su responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse en la misma vía en contra de los servidores públicos a que se refieren los artículos 117 y 118 de la Constitución Política del Estado, se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo anterior de esta Ley, en materia de Juicio Político ante el Congreso del Estado. En este caso, la Comisión Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la probable existencia del delito y la presunta responsabilidad del inculpado, así como la subsistencia de la protección del fuero Constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la Comisión dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.

Del Artículo 25 al Artículo 26 ...

Artículo 27.-...

Para proceder penalmente contra el Gobernador, Diputados y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los términos del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso del Estado, al recibir de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la declaración correspondiente, procederá conforme a sus atribuciones y en los términos de la Constitución Local a declarar si procede la homologación de la declaratoria del Congreso de la Unión y consecuentemente el retiro de la protección que la propia Constitución Política del Estado otorga a tales servidores públicos, a fin de ser enjuiciados como legalmente hubiere lugar.

Artículo 28.- Cuando se siga proceso penal a un servidor público de los mencionados en el artículo 117 y 118 de la Constitución Política del Estado, sin haberse satisfecho el procedimiento a que se refieren los artículos anteriores, la Secretaría del Congreso del Estado o de su Diputación Permanente, librándole oficio al Juez o Tribunal que conozca de la causa, a fin de que suspenda el procedimiento en tanto se planlea y resuelve si ha lugar a proceder.

Del Artículo 129 al Artículo 39 ...

Artículo 40.- Cuando en el curso del procedimiento incoado a un servidor público de los mencionados en los artículos 7 y 24 de esta Ley, se presentare nueva denuncia en su contra, se procederá respecto de ella con arreglo a esta Ley, hasta agotar la instrucción de los diversos procedimientos, procurando, de ser posible, la acumulación procesal.

Artículo 41 ...

Artículo 42.- Las declaraciones o resoluciones aprobadas por el Congreso del Estado con arreglo a esta Ley, se comunicarán al Tribunal Superior de Justicia, si se tratase de alguno de los integrantes del Poder Judicial a que alude esta Ley; y en todo caso al Ejecutivo del Estado, para su conocimiento y efectos legales, y para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

El Congreso del Estado recibirá la notificación de las declaratorias de las Cámaras del H. Congreso de la Unión relativa al Gobernador del Estado, Diputados Locales y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en los términos de los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(El párrafo primero del artículo 43, fue observado por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

Las atribuciones que este Título otorga a la Contraloría, se confieren en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo a su propio marco normativo, a la Auditoría, a los Órganos de Control Interno en los Poderes Legislativo y Judicial, a los Órganos Autónomos y a los Municipios.

Artículo 44.- Tienen la obligación de presentar declaración de situación patrimonial ante el órgano competente, los servidores públicos mencionados en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en general todos aquellos que recauden, administren, reciban, manejen, apliquen o ejerzan recursos públicos económicos, materiales o humanos de cualquier naturaleza u origen, así como aquellos que resguarden o custodien documentación justificativa y comprobatoria e información clasificada por Ley como reservada o confidencial con motivo de sus funciones y facultades, sea cual fuere el carácter de su nombramiento, designación o contratación, en los términos y plazos señalados por la presente Ley y demás ordenamientos aplicables, bajo protesta de decir verdad:

I.- En el Congreso del Estado: los Diputados, Oficial Mayor, Tesorero, Auditor Superior del Estado, Directores, Jefes de Departamento o equivalentes, Auditores y responsables de las unidades, áreas o departamentos; así mismo, lo harán los Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos, Secretarios, Tesoreros, Contralores Internos o sus equivalentes, hasta los servidores públicos municipales con nivel de Jefes de Departamento o sus equivalentes;

II.- En la Contraloría: todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo, desde el Gobernador del Estado hasta el nivel de Jefe de Departamento. Así también los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, desde el Procurador General hasta los Jefes de Departamento, incluyendo a los Agentes del Ministerio Público, Agentes Estatales de Investigaciones y Policías Estatales Preventivos;

III.- En el Poder Judicial: los Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales, Actuarios y Ejecutores de cualquier categoría o designación;

IV.- En el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca: todos los servidores públicos, desde el Consejero Presidente hasta el nivel de Jefe de Departamento o equivalente;

(La fracción V del artículo 44, fue observada por el Titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

VI.- En la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca: todos los servidores públicos desde el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca hasta el nivel de Jefe de Departamento o equivalente;

VII.- En los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las Leyes: todos los servidores públicos, desde los Titulares de aquellos hasta el nivel de Jefe de Departamento o equivalente; y

VIII.- En el órgano competente: todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos del Estado y los Municipios; realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y quienes intervengan en la adjudicación de pedidos o contratos.

En todo caso la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultados para determinar, fundada y motivadamente, a aquellos servidores que tengan la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial respectiva, los lineamientos, los plazos y la forma en deberán hacerlo.

Artículo 45.-...

I.- Inicial: dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión del empleo, cargo o comisión;

II.- Anual: durante los meses de mayo y junio de cada año, siempre y cuando continúe el servidor público en el desempeño de su cargo, empleo o comisión, salvo que en ese mismo año se hubiese presentado la declaración a que se refiere la fracción I; y

III.- Final: dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del empleo, cargo o comisión.

Artículo 46.- La Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno en los Poderes Legislativo y Judicial y en los Órganos Autónomos, expedirán las normas, manuales, formatos e

instruccionales que señalarán lo que es obligatorio declarar y establecerán los medios para la presentación de la declaración de situación patrimonial.

(El párrafo segundo del artículo 46, fue observado por el Titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

La Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno en los Poderes Legislativo y Judicial y en los Órganos Autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán a su cargo la implementación, administración y control del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los servidores públicos.

Para el efecto del cómputo de la presentación de la declaración patrimonial, las unidades administrativas en el Poder Ejecutivo y sus equivalentes en los Poderes Legislativo y Judicial, en los Órganos Autónomos y en los Municipios, en el ámbito de sus competencias, le notificarán al servidor público, dentro de los diez días siguientes a la toma de posesión y a la conclusión de su empleo, cargo o comisión, las obligaciones establecidas en el artículo 45 de esta Ley.

Las unidades administrativas o sus equivalentes a que se hace referencia en el párrafo anterior, estarán obligadas a notificar a la Contraloría, la Auditoría o los Órganos de Control Interno que sean competentes para conocer de la situación patrimonial del servidor público de que se trate, la fecha de la toma de posesión y de la conclusión de su empleo, cargo o comisión, dentro de los diez días siguientes al inicio del mismo.

Artículo 47.- En la declaración inicial y final de situación patrimonial se manifestarán los bienes muebles e inmuebles, los derechos y obligaciones, así como, la fecha y el valor de adquisición y enajenación, que se establezcan en el formato que para el efecto expidan la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno en los Poderes Legislativo y Judicial, en los Órganos Autónomos y en los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

En las declaraciones anuales se manifestarán las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición y/o enajenación, en todo caso, se indicará el medio por el que se hizo la adquisición o enajenación.

Artículo 47 Bis.- La Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno de los Poderes Legislativo y Judicial y de los Órganos Autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán un registro de los servidores públicos, expedirán las normas para la operación del registro y las constancias de sanciones, en todo caso la de inhabilitación, así como, de no existencia de estas sanciones.

En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como, en su caso, los procedimientos administrativos instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y a terceros y, en su caso, las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas, así como toda aquella información que dentro de sus atribuciones y competencias estimen convenientes.

El domicilio que declaren como suyo los servidores públicos obligados a la presentación de la declaración de situación patrimonial, se reputará como su domicilio legal para los efectos de esta Ley.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial, así como, los Órganos Autónomos y los Municipios, invariablemente obtendrán la constancia de no inhabilitación, expedida por la Contraloría, de quienes pretendan ingresar al servicio público, previo al nombramiento o contratación respectivos.

Dichas constancias se obtendrán del sistema electrónico que para el efecto establezca la Contraloría.

Los derechos recaudados por la expedición de las constancias de inhabilitación, de no inhabilitación y en general por los servicios que presta la Contraloría, serán reintegrados a dicha Dependencia por vía de ampliación presupuestal.

La información relativa a la situación patrimonial estará disponible hasta por un plazo de cinco años posteriores a que el servidor público concluya su empleo, cargo o comisión, y su

publicación se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate.

La disponibilidad y el destino de la información y documentación en poder de los sujetos obligados relativa a la situación patrimonial de los servidores públicos, estará a lo dispuesto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Protección de Datos Personales, y de Archivos del Estado.

La información y documentación relativa a la situación patrimonial de los servidores públicos en poder de los sujetos obligados, tendrá valor probatorio, cuando en el ejercicio de sus respectivas atribuciones la autoridad administrativa correspondiente lo solicite, o cuando la Contraloría, la Auditoría o los Órganos de Control Interno en los Poderes Legislativo y Judicial y en los Órganos Autónomos lo requieran con motivo de la sustanciación de procedimientos administrativos de responsabilidades.

El manejo indebido o ilícito de la información contenida en el registro a que se refiere este artículo, será motivo de responsabilidad administrativa y se sancionará por las autoridades competentes. La Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno en los Poderes Legislativo y Judicial y en los Órganos Autónomos, denunciarán a través de su titular, los hechos al Ministerio Público cuando consideren la probable comisión del delito.

(El artículo 48, fue observado por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

(El artículo 48, segundo párrafo, fue observado por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

(El artículo 48, tercer párrafo fue observado por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

(El artículo 48, cuarto párrafo fue observado por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

(El artículo 48, quinto párrafo fue observado por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

Artículo 48 Bis.- La Auditoría, los Órganos de Control Interno en los Poderes Legislativo y Judicial y de los Órganos Autónomos y en los Ayuntamientos, deberán remitir a la Contraloría dentro del término de 24 horas las resoluciones firmes por las que se imponga sanción administrativa, para su registro correspondiente, a fin de que se tenga una base de datos estatal.

Artículo 48 Ter.- Será el superior jerárquico de la institución pública o a quien éste designe, el ejecutor de las sanciones que recaigan sobre los titulares de las áreas administrativas de vigilancia y control de la Contraloría, de la Auditoría, de los Órganos de Control Interno en los Poderes Legislativo y Judicial y en los Órganos Autónomos y en los Ayuntamientos, que se abstengan injustificadamente de investigar o sancionar a los infractores, o que al hacerlo no se ajusten a las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, así como cuando incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.

(El artículo 49, fue observado por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

I.- Cuando existan elementos o datos suficientes o los signos exteriores de riqueza, sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes, podrán citarlo personalmente, fundando y motivando su acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y se le harán saber los hechos que motiven la investigación, señalándole las incongruencias detectadas respecto de los bienes que integran su patrimonio;

II.- Dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la recepción del citatorio, el servidor público podrá formular las aclaraciones pertinentes ante la Contraloría, la Auditoría o los Órganos de Control Interno competentes, quienes en el ámbito de su respectiva competencia, emitirán la correspondiente resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes; y

III.- Cuando no fuere posible entregar el citatorio, o cuando el servidor público o la persona con quien se entienda la notificación se negaren a firmar de recibido, el notificador hará constar dicha circunstancia en un acta que levantará ante dos testigos, sin que ello afecte el valor probatorio del documento.

(El artículo 49 Bis, fue observado por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

Artículo 50.- Todas las actas que se levanten con motivo de las investigaciones, visitas de inspección, auditorías, así como cualquier acto de fiscalización y de comprobación, se harán constar por escrito y deberán ser firmadas por el servidor público y los testigos que para tal efecto designe éste. Si el servidor público o los testigos se negaren a firmar, el visitador lo hará constar, sin que estas circunstancias afecten el valor probatorio del documento, conforme al artículo 64 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca.

(El párrafo primero del artículo 50 Bis, fue observado por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

Para los efectos del párrafo anterior, los titulares de la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control interno competentes, o de conformidad a lo señalado en su marco normativo, podrán solicitar adicionalmente la información bancaria que corresponda a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como aquella de competencia del Servicio de Administración Tributaria.

(El primer párrafo del artículo 51, fue observado por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

Para los efectos de esta disposición, se considerará a la Contraloría, a la Auditoría y a los Órganos de Control Interno, coadyuvantes del Ministerio Público en el procedimiento penal respectivo.

Los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilegítimo, serán sancionados en los términos que disponga la legislación penal del Estado.

Artículo 52 ...

Artículo 53.- La Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno, actuarán en lo conducente respecto a sus servidores públicos, conforme a las disposiciones que se establecen en el presente Capítulo.

Artículo 54.- (DEROGADO).

TITULO CUARTO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

CAPITULO I PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO, OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO Y SUJETOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Artículo 55.- El servicio público se regirá por los siguientes principios: eficiencia, honradez, imparcialidad, idoneidad, lealtad, legalidad, probidad y responsabilidad.

Artículo 56.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, sea cual fuere el carácter de su nombramiento, designación o contratación y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II.-...

III.- Abstenerse de causar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de cualquier Institución Pública, sea por el manejo irregular de fondos y valores estatales o municipales, o por irregularidades en la recaudación, administración, recepción, manejo, aplicación o ejercicio de recursos públicos de cualquier naturaleza u origen, sean concertados o convenidos por el Estado con la Federación o con sus Municipios;

IV.- Evitar los actos e informar a su superior jerárquico, cuando estando dentro de su competencia o por razón de la naturaleza de sus funciones, tenga conocimiento de que puede resultar dañada la hacienda pública estatal o municipal o el patrimonio de cualquier Institución Pública;

V.- Rendir cuentas ante el órgano competente sobre el ejercicio de las funciones y recursos públicos que tenga asignados y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública Estatal y Federal cuando ésta última, por razón de la naturaleza de sus funciones se encuentre dentro de su competencia, proporcionando la documentación justificativa y comprobatoria y la información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales aplicables;

VI.- Utilizar con eficiencia y transparencia los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ejercer con legalidad las facultades que le sean atribuidas y hacer uso de la información clasificada por Ley como reservada y confidencial a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a que estén afectos;

VII.- Custodiar y resguardar la documentación justificativa y comprobatoria y la información que por razón de su empleo, cargo o comisión conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso indebido, la sustracción, la destrucción, el ocultamiento o la inutilización dolosa de aquella.

El manejo indebido o ilícito de la documentación e información a que se refiere esta fracción, será motivo de responsabilidad administrativa y se sancionará por las autoridades competentes. Los titulares de la Contraloría, de la Auditoría y de los Órganos de Control Interno, en el ámbito de sus respectivas competencias, denunciarán los hechos al Ministerio Público cuando consideren la probable comisión del o los delitos que resultaren;

VIII.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de este;

IX.- Observar respeto e igualdad de trato en el mando y supervisión de sus subalternos, así como abstenerse de incurrir en agravio y/o abuso de autoridad;

X.- Guardar el secreto respecto de los asuntos de los que tenga conocimiento con motivo de su cargo;

XI.- Evitar los actos u omisiones que pongan en peligro la seguridad y la de los demás servidores públicos, así como a las de las oficinas de su adscripción;

XII.- Asistir puntualmente a sus labores;

XIII.- Abstenerse de hacer propaganda de toda índole durante las horas de trabajo;

XIV.- Cumplir las intervenciones que reciba con motivo de su empleo, cargo o comisión;

XV.- Abstenerse de concurrir al desempeño de sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas prohibidas;

XVI.- Dar el curso que corresponda a las promociones que reciba;

XVII.- Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus funciones y atribuciones;

XVIII.- Comunicar por escrito al titular de la Institución Pública en la que preste sus servicios, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo o las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que conforme a derecho procedan, las cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y al interesado;

XIX.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de concluido el período para el cual se le designó, o por haber sido cesado, o por cualquier otra causa legal que se lo impida;

XX.- Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa justificada a sus labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan;

XXI.- Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley prohíba, así como aquellos que no sean compatibles.

Cuando de la incompatibilidad resulte beneficio o lucro para el servidor público o cause daños o perjuicios a la hacienda pública se estará a lo dispuesto en el artículo 57, fracciones V y VI de esta Ley.

La compatibilidad se da en dos o más empleos que se presten en distintas instituciones públicas y se desempeñen efectivamente las funciones en turnos diferentes o en horarios y jornadas de labores fijadas para la prestación del servicio, que no interfieran entre sí y se cumplan los requisitos y perfiles del o los puestos a desempeñar;

XXII.- Abstenerse de nombrar, contratar o promover como servidores públicos a su cónyuge, parientes consanguíneos, afines o civiles hasta el cuarto grado, y que por razón de su adscripción dependan jerárquicamente del área administrativa de la que sea titular.

Cuando al asumir el servidor público el cargo o comisión de que se trate, y ya se encontrare en ejercicio de una función o responsabilidad pública el familiar comprendido dentro de la

restricción prevista en esta fracción, deberán preservarse los derechos previamente adquiridos por este último. En este caso el impedimento será para el fin de excusarse de intervenir, en cualquier forma, respecto del nombramiento de su familiar.

El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato, o en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos.

Para los efectos de esta fracción y de las fracciones IV, XXIV y XXXI de este artículo, se entenderá por superior jerárquico lo dispuesto en el artículo 6, fracción III de esta Ley o a quien establezca su propio reglamento interno o disposición normativa según corresponda;

XXIII.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

XXIV.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos y afines hasta el cuarto grado, o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato y, en su caso, al superior jerárquico sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;

XXV.- Abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, durante el ejercicio de sus funciones, dinero, derechos y/o obligaciones, bienes mediante enajenación a su favor en precios notoriamente inferiores al que tengan en el mercado ordinario, servicios, cualquier beneficio estimable en dinero o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a las que se refiere la fracción XXII de este artículo que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto.

Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

Habrán intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

Para los efectos del primer párrafo de esta fracción, no se considerarán los bienes y/o servicios que reciba el servidor público en una o más ocasiones, de una misma persona física o moral de las mencionadas en esta fracción, durante un año, cuando el valor acumulado durante ese año, no sea superior a veinticinco veces el salario mínimo diario vigente en el Estado al momento de su recepción. Los bienes a que se refiere este párrafo deberán ser manifestados por el servidor público en su declaración de situación patrimonial anual.

En ningún caso se podrán recibir de las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, títulos valor, bienes muebles e inmuebles o cesiones de derechos sobre juicios o controversias en las que se dirima la titularidad de los derechos de posesión o de propiedad sobre bienes de cualquier clase.

Se sancionarán como cohecho las conductas de los servidores públicos que violen lo dispuesto en esta fracción, de conformidad con la legislación penal del Estado, independientemente de las sanciones administrativas a que haya lugar.

Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en esta fracción;

XXVI.- Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su

competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XXII de este artículo;

XXVII.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XXI de este artículo;

XXVIII.- Abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XXII de este artículo;

XXIX.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en términos de la legislación aplicable;

XXX.- Cumplir y hacer cumplir con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes;

XXXI.- Informar al superior jerárquico acerca de todo acto u omisión de los servidores públicos bajo su mando o supervisión, que pueda implicar inobservancia de las obligaciones a las que se refieren las fracciones de este artículo, en los términos de las normas que al efecto se expidan.

Cuando el informe que presente el servidor público a su superior jerárquico deba ser comunicado a la Contraloría, a la Auditoría o al Órgano de Control Interno competente, el superior jerárquico procederá a comunicarlo, en breve término, bajo su estricta responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del subalterno interesado. Si el superior jerárquico omite la comunicación a la Contraloría, a la Auditoría o al Órgano de Control Interno competente, el subalterno podrá practicarla directamente, informando a su superior acerca de este acto;

XXXII.- Abstenerse de cualquier acto u omisión, que implique omisión, inobservancia o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, relacionada con el servicio público;

XXXIII.- Abstenerse de impedir, por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, la formulación de quejas y denuncias, o que con motivo de las mismas, realice cualquier conducta injusta u omita una justa y debida, que lesione los intereses de los quejosos o denunciantes;

XXXIV.- Proporcionar en forma oportuna y veraz toda la información y datos solicitados por las autoridades a que hace referencia el artículo 3 de esta Ley, a efecto de que aquellas puedan cumplir con las facultades y atribuciones que les correspondan.

En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que las autoridades de referencia consideren necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se les hubiesen proporcionado.

En los casos en que exista negativa de lo establecido en el párrafo anterior, o bien cuando la autoridad lo estime pertinente, ésta última podrá decretar, debidamente fundado y motivado, la requisición de información o inspección de las instalaciones, expedientes o documentación, vigilando que con ello no se interrumpa el servicio público de la institución pública de que se trate;

XXXV.- Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de contratos o realizar pedidos relacionados con adquisiciones, arrendamientos, mantenimientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta o con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, con las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría, la Auditoría o los Órganos de Control Interno competentes a propuesta razonada, conforme a las disposiciones legales aplicables del titular de la institución pública de que se trate. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

XXXVI.- Cumplir con la entrega o recepción de los recursos materiales, financieros, así como todo lo relacionado con los recursos humanos asignados, asuntos en trámite y demás funciones a su cargo, en los términos que establezcan las disposiciones legales o administrativas que al efecto se señalen;

XXXVII.- Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XXII, de este artículo bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión;

XXXVIII.- Denunciar ante la Contraloría, la Auditoría o el Órgano de Control Interno que corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa, en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables;

XXXIX.- Abstenerse hasta un año después de haber concluido su empleo, cargo o comisión, de lo siguiente:

a) Aprovechar su influencia u obtener alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XXII del presente artículo;

b) Aprovechar en beneficio propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público; y

c) Desempeñarse como servidor público en la administración de quien haya ganado la elección que ellos organizaron o calificaron, tratándose de servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de Dirección y Secretaría General en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sus Consejeros, Presidencias de Consejos Distritales y los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral;

XL.- Abstenerse de realizar acciones u omisiones que impidan el cumplimiento eficiente, eficaz y oportuno de los calendarios de presupuesto autorizados;

XLI.- Cumplir con los objetivos y metas anuales de los programas operativos de los ejecutores del gasto. En caso de incumplimiento que cause afectación grave, se estará a lo dispuesto en el artículo 57, fracciones IV, V y VI.

XLII.- Abstenerse de cometer actos u omisiones que eviten el reintegro de recursos no ejercidos a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, o en su caso, a la Tesorería de la Federación en la forma y plazos señalados por la legislación respectiva y demás disposiciones generales aplicables;

XLIII.- Abstenerse de omitir o alterar registros, actos o partes de la contabilidad de los recursos públicos, cualquiera que sea su naturaleza, así como abstenerse de alterar los documentos que integran la contabilidad de la información financiera;

XLIV.- Abstenerse de no realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece la legislación aplicable, con información confiable y veraz;

XLV.- Abstenerse de no tener o no conservar, en los términos de la normativa aplicable, la documentación justificativa y comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y egresos de las instituciones públicas;

XLVI.- Verificar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo;

XLVII.- Realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece la legislación aplicable, cualquiera que sea su naturaleza, con información confiable y veraz, así como abstenerse de alterar u omitir los registros, actos o partes de la contabilidad de los recursos públicos que integran la información financiera;

XLVIII.- Tener y conservar, en los términos de la normativa aplicable, la documentación justificativa y comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y egresos de las instituciones públicas;

XLIX.- Verificar que los servidores públicos sujetos a su mando y supervisión, cumplan con las disposiciones de este artículo;

L.- Atender en tiempo y forma las recomendaciones públicas no vinculatorias, propuestas, informes, denuncias, quejas o cualquier resolución que emitan los órganos defensores de los derechos humanos en el ámbito de su competencia;

LI.- Atender en tiempo y forma las resoluciones, criterios generales, lineamientos, requerimientos, observaciones o recomendaciones que emita la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el ámbito de su competencia;

LII.- Publicar y difundir la información a la que todo ciudadano tiene derecho en términos de las Leyes en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; y

LIII.- Las demás que le impongan las Leyes y disposiciones reglamentarias o administrativas.

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, dará lugar a los procedimientos y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de lo establecido en otras Leyes. Serán los titulares de la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno, en el ámbito de sus respectivas competencias, los que denunciarán los hechos ante el Ministerio Público cuando exista la probable comisión de delitos.

Artículo 56 Bis.- Los servidores públicos y las personas a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, serán sujetos de responsabilidad administrativa disciplinaria y/o resarcitoria, cuando incumplan las obligaciones a que se refiere el artículo 56 de este ordenamiento y/o incurran en lo establecido en el artículo 82 de esta Ley.

Los procedimientos que se señalan en el párrafo anterior podrán substanciarse en una sola pieza de autos, de manera individual o colectiva, a consideración de la Contraloría, de la Auditoría o de los Órganos de Control Interno competentes.

La Contraloría difundirá y verificará el cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública, el cual establece las reglas claras respecto de la actuación de los servidores públicos y los particulares, a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, a fin de que impere invariablemente una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en situaciones específicas que se les presenten, propiciando así una plena vocación en el servicio público en beneficio de la colectividad. Lo mismo harán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Auditoría y los Órganos de Control Interno.

CAPÍTULO II

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS

Artículo 57.- Las sanciones por responsabilidad administrativa, se fincarán, en primer término, a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que la originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos, y consistirán en:

I.- (DEROGADO);

II.- Amonestación privada o pública, hecha en resolución sobre las consecuencias de la infracción cometida, excitando a la enmienda y previniendo la imposición de una sanción mayor en caso de incurrir en nueva infracción;

III.- Suspensión del ejercicio del empleo, cargo o comisión conferidos y a percibir la remuneración correspondiente por el tiempo que dure la misma.

La suspensión en ningún caso podrá ser menor de tres días ni mayor de seis meses. La suspensión no surtirá perjuicio en las prestaciones que el sancionado tuviere en el sistema de seguridad social;

IV.- Destitución administrativa del empleo, cargo o comisión, cuya consecuencia será la extinción de la relación laboral entre la institución pública correspondiente y el sancionado;

V.- Sanción económica o pago en dinero que en concepto de retribución debe hacer el servidor público a favor del erario estatal o municipal y, en su caso a particulares, por la infracción cometida. La sanción económica se fijará en cantidad líquida que en ningún caso será inferior al importe de diez días ni mayor a cien del sueldo base presupuestal que perciba el servidor

público, siempre que de la infracción cometida no obtenga beneficios ni cause daños y perjuicios, en caso contrario, se estará a lo dispuesto en el artículo 73 de esta Ley.

Las sanciones económicas o pagos en dinero que se determinen conforme a las disposiciones de esta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose para su cobro, al procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado;

VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal y municipal.

(El párrafo segundo de la fracción VI, del artículo 57, fue observado por el Titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio y/o lucro, o cause daños y/o perjuicios, se sancionará de conformidad con lo siguiente:

- a) Si el monto del beneficio y/o lucro, daños y/o perjuicios es de diez a quinientos salarios mínimos diarios, se impondrán de uno a seis meses;
- b) Si el monto del beneficio y/o lucro, daños y/o perjuicios es de quinientos uno a mil salarios mínimos diarios, se impondrán de seis a doce meses;
- c) Si el monto del beneficio y/o lucro, daños y/o perjuicios es de mil uno a cuatro mil salarios mínimos diarios se impondrán de uno a diez años; y
- d) Si el monto del beneficio y/o lucro, daños y/o perjuicios excede de cuatro mil uno salarios mínimos diarios, se impondrán de diez a veinte años.

Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

(El párrafo tercero del artículo 57, fue observado por el Titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

(El párrafo cuarto del artículo 57, fue observado por el Titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

En caso de que se viole cualquiera de las fracciones consideradas como graves, la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes, podrán presentar las denuncias y querrelas penales, a que haya lugar, por la presunción de la existencia de la comisión de un delito.

Las sanciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes.

Artículo 58.- Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley a partir de diez años en adelante, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la institución pública a la que pretenda ingresar, dé aviso a la Contraloría, a la Auditoría o, en su caso, a los Órganos de Control Interno competentes, según corresponda, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.

Artículo 59.- Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere el presente Título de esta Ley, la Contraloría, la Auditoría, los Órganos de Control Interno y los Ayuntamientos podrán emplear los siguientes medios de apremio:

I.- Sanción económica de hasta cincuenta veces el salario mínimo diario vigente en el Estado; y

II.-...

...

Artículo 60.- Los procedimientos que se sigan de conformidad con las disposiciones de este Título Cuarto, deberán ser breves y sencillos y estarán sujetos a los principios de inmediatez, concentración y rapidez. El personal de la Contraloría, de la Auditoría y de los Órganos de Control Interno competentes, deberá manejar de manera confidencial la información o documentación relativa a los asuntos de su competencia.

En todo lo relacionado al procedimiento, ofrecimiento y valoración de pruebas que se regulan en este Título Cuarto, son aplicables supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca y demás disposiciones aplicables citadas en la presente Ley.

Artículo 61.- La Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes, podrán nombrar delegados, comisarios o sus equivalentes en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, en los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Órganos Autónomos, para facilitar la recepción de quejas y denuncias, debiendo enviar estas a la Contraloría, a la Auditoría y a los Órganos de Control Interno competentes.

Artículo 62.- La Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno, en el ámbito de sus respectivas competencias, investigarán las quejas y denuncias que reciban, así como las conductas de servidores públicos que puedan constituir inobservancia a las disposiciones del artículo 56 de esta Ley que sean de su conocimiento, bajo las prescripciones siguientes:

I.- Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público y se formularán por comparecencia o por escrito, pudiendo en este último caso ser enviadas por correo o medio electrónico. En todos los casos el promovente deberá ser citado para que ratifique su promoción.

El quejoso o denunciante, en ningún caso, será parte en los procedimientos que se instaren con motivo de esta Ley;

II.- Practicarán todas las diligencias que estimen necesarias a fin de contar con los elementos suficientes para la mejor sustanciación del asunto que se investiga;

III.- Si después de valoradas las constancias y actuaciones, se considera la falta o insuficiencia de elementos para iniciar procedimiento de responsabilidad en contra del servidor público, se ordenará el archivo del expediente y se hará del conocimiento del promovente, para que en su caso, aporte mayores elementos de prueba;

IV.- Si se cuenta con elementos que hagan probable la responsabilidad del servidor público, se iniciará el procedimiento que establece el artículo 69 de esta Ley, sin perjuicio de lo previsto en las fracciones anteriores; y

V.- Establecerán normas, políticas, bases, lineamientos y criterios técnicos y operativos que regulen el funcionamiento de los instrumentos, sistemas y procedimientos para la recepción y atención de las quejas y denuncias relacionadas con la actuación de los servidores públicos, así como para la atención de las peticiones ciudadanas sobre los trámites y servicios. Lo propio harán en la esfera de sus competencias la Auditoría, los Órganos de Control Interno en los Poderes Legislativo y Judicial, en los Órganos Autónomos y en los Ayuntamientos.

Artículo 63.- La Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes y todos los servidores públicos, tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias a que se refiere el artículo anterior, y evitar que con motivo de las mismas se causen molestias indebidas a los quejosos o denunciantes.

Artículo 64.- Las autoridades señaladas en el artículo 3 de esta Ley, podrán establecer los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades de sus servidores públicos, derivadas del incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 56 de esta Ley, así como para aplicar las sanciones establecidas en este Título, conforme a lo establecido en el artículo 75 de esta Ley.

...

...

Artículo 65.- Todo servidor público deberá denunciar por escrito ante la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes, los hechos que a su juicio impliquen incumplimiento de obligaciones de sus servidores subordinados.

La Contraloría, la Auditoría o los Órganos de Control Interno competentes, determinarán si existe o no responsabilidad administrativa y aplicarán las sanciones disciplinarias correspondientes.

Las denuncias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se presentarán ante la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes, cuando se trate de infracciones graves, o cuando, en su concepto y habida cuenta de la naturaleza de los hechos denunciados, deban conocer el caso o participar en las investigaciones.

Artículo 66.- La Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno, cuando tuvieren conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad civil, penal o de cualquier naturaleza, deberán dar vista de ellos a la autoridad competente.

Cuando se trate de servidores públicos municipales, el síndico municipal dará vista al Ayuntamiento y a la autoridad competente en su caso.

Artículo 67.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes, podrán llevar a cabo investigaciones, visitas de inspección, auditorías, así como cualquier acto de fiscalización y de comprobación debidamente fundadas y motivadas a través de sus áreas correspondientes. Para este efecto, los titulares de las instituciones públicas deberán proporcionar la información y documentación que les sea requerida, sin que ello genere costas para la Contraloría, para la Auditoría o para el Órgano de Control Interno en el ejercicio de sus atribuciones.

Cuando los servidores públicos de las instituciones públicas se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de la Contraloría, la Auditoría o de los Órganos de Control Interno competentes, éstas podrán aplicar como medidas de apremio, las siguientes:

- I.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública;
- II.- Imponer la multa que corresponda en los términos de la Ley;
- III.- Decretar el aseguramiento precautorio de los bienes, documentación, información y demás elementos que tengan relación con los hechos y se consideren pertinentes.

Para los efectos de este artículo, la autoridad que practique el aseguramiento precautorio deberá levantar acta circunstanciada en la que precise la forma o manera en que los servidores públicos de la institución pública sujeta a fiscalización, revisión o inspección se opusieron, impidieron u obstaculizaron físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades a que refiere esta Ley, observando en todo momento en lo conducente, las disposiciones y formalidades establecidas en ésta Ley; y

IV.- Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente.

Para efectos de este artículo, las autoridades judiciales estatales y los cuerpos de seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la autoridad administrativa.

El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias para que las autoridades administrativas ingresen al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se utilice para el desempeño de las actividades de las instituciones públicas, para estar en posibilidad de iniciar el acto de fiscalización, revisión o inspección física o continuar el mismo; así como en brindar la seguridad necesaria a las autoridades administrativas.

Todas las actas que se levanten con motivo de las investigaciones, visitas de inspección, auditorías, así como cualquier acto de fiscalización y de comprobación, se harán constar por escrito y deberán ser firmadas por el servidor público y los testigos que para tal efecto designe. Si el servidor público o los testigos se negaren a firmar, el visitador lo hará constar, sin que estas circunstancias afecten el valor probatorio que, en su caso, posea dicho documento.

Si de las investigaciones, visitas de inspección, auditorías, así como cualquier acto de fiscalización y de comprobación que se realicen se tuviera conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad de servidores públicos, se iniciará el procedimiento disciplinario correspondiente.

Si se trata de responsabilidad cuyo conocimiento compete a la Contraloría, a la Auditoría, a los Órganos de Control Interno o a los Ayuntamientos, éstos se avocarán directamente al asunto, informando de ello al titular de la institución pública de adscripción del servidor público infractor, para que, por sí o a través de un representante participe o coadyuve en el procedimiento de determinación de responsabilidades, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 68.- La Contraloría, a través de la Dirección de Procedimientos Jurídicos o su equivalente orgánico, aplicará en el ámbito de sus atribuciones, las sanciones correspondientes a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, cuando estos incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.

En los mismos términos procederán el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los Órganos Autónomos y los Ayuntamientos, respecto a sus servidores públicos, de conformidad con sus respectivas Leyes orgánicas.

Artículo 69.- La Contraloría, a través de la Dirección de Procedimientos Jurídicos o su equivalente orgánico, y los Órganos de Control Interno competentes, impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo, mediante el procedimiento siguiente:

I.- Se citará al presunto responsable a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de esta Ley, y demás disposiciones aplicables.

En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; la autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor público; el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor y contestar en relación a lo que se le imputa, así como ofrecer pruebas, excepto la confesional a cargo de la autoridad, y alegar lo que a su derecho convenga. En todo caso la persona a quien se notifica deberá designar domicilio ubicado en el lugar de residencia de la Contraloría, la Auditoría o el Órgano de Control Interno competente, pudiendo señalar también correo electrónico, para que se le hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias;

II.- Entre la fecha de la citación y la de la audiencia, deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de veinte días hábiles, pudiendo la autoridad administrativa prorrogar dicho término, por una sola vez, hasta por veinte días hábiles más, cuando exista causa justificada;

III.- Hecha la notificación, si el servidor público no comparece, sin causa justificada, se tendrán por ciertos los actos u omisiones que se le imputan;

IV.- La audiencia comprenderá las siguientes etapas: Etapa de ofrecimiento de pruebas; Etapa de desahogo de pruebas, y Etapa de alegatos, que podrán presentarse por escrito o de manera verbal;

V.- Concluida la etapa de alegatos, la Contraloría y los Órganos de Control Interno competentes, procederán a dictar la resolución respectiva dentro de los cincuenta días hábiles siguientes, resolviendo sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones administrativas correspondientes, y procederá a notificar la resolución en breve término.

Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al superior jerárquico según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles, y éste a su vez, informará a la Contraloría o al Órgano de Control Interno correspondiente sobre el cumplimiento de la resolución, en un plazo no mayor de tres días hábiles a la ejecución de ésta;

VI.- La Contraloría y los Órganos de Control Interno, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán ampliar el plazo para dictar la resolución a que se refiere el primer párrafo de la fracción anterior, por única vez, hasta por cincuenta días hábiles, cuando exista causa justificada a juicio de las propias autoridades;

VII.- Durante la sustanciación del procedimiento, previamente al cierre de las etapas de la audiencia, la Contraloría y los Órganos de Control Interno competentes, podrán practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público denunciado, así como requerir a éste y a las instituciones públicas o a los particulares, sean personas físicas o morales, la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad, estando obligadas éstas a proporcionarlas de manera oportuna.

Si las autoridades no cuentan con elementos suficientes para resolver o adviertan datos o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otros servidores públicos o particulares, sean personas físicas o morales, podrán disponer la práctica de otras diligencias o citar para otra u otras audiencias;

VIII.- Previa o posteriormente al citatorio del presunto responsable, la Contraloría y los Órganos de Control Interno competentes, podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la prosecución de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute. La determinación de la Contraloría o de los Órganos de Control Interno, harán constar expresamente esta salvedad.

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y registrará desde el momento en que sea notificada al interesado y a las instituciones públicas que correspondan, para llevar a cabo las acciones y procesos para la retención temporal de las percepciones y su posterior liberación, en caso procedente, para el cumplimiento de la misma.

La suspensión cesará cuando así lo resuelva la Contraloría o los Órganos de Control Interno competentes, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad del servidor público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente.

En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se le imputan, la institución pública a la que corresponda la adscripción de dicho servidor público, lo restituirá en el goce de sus derechos y le cubrirá las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido.

Se requerirá la autorización del Gobernador del Estado o del Presidente Municipal correspondiente para dicha suspensión, cuando el nombramiento del servidor público de que se trate hubiese sido realizado por alguno de aquellos. Igualmente, se requerirá autorización del Congreso del Estado, o de la Diputación Permanente, o en su caso, del Ayuntamiento correspondiente si dicho nombramiento requirió ratificación de alguno de éstos, en términos de la Constitución Política del Estado;

IX.- Si el servidor público sujeto al procedimiento disciplinario confesare su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia esta Ley, se procederá de inmediato a dictar la resolución, a no ser que quien conozca del procedimiento disponga de la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión, se impondrá al servidor público dos tercios de la sanción aplicable, si es de naturaleza económica, pero en lo que respecta a indemnización, ésta en todo caso deberá ser suficiente para cubrir los daños o perjuicios causados y siempre deberá restituirse o resarcirse, o ambos, cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción; y

X.- El titular de la Institución Pública que corresponda a la adscripción del servidor público sujeto al procedimiento disciplinario, podrá designar un representante que asista a las diligencias, dándosele vista de todas las actuaciones.

La Auditoría ejercerá las atribuciones que se le confieren conforme a lo establecido en esta Ley, la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca y demás disposiciones aplicables en materia de sanciones administrativas.

Artículo 70.- Las citaciones y notificaciones que se deban realizar para la práctica del procedimiento disciplinario podrán ser:

I.- Personales;

II.- Por correo certificado con acuse de recibo;

III.- Por edictos;

IV.- Por estrados; y

V.- Por correo electrónico.

El citatorio para la audiencia de Ley a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se comunicará al imputado conforme a lo dispuesto en la fracción I del presente artículo; de la

misma forma se realizará la notificación de la resolución de fondo del asunto, siempre y cuando el servidor público resida en el lugar del juicio. En caso contrario, se hará por correo certificado con acuse de recibo o a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Cuando el domicilio de quien deberá ser citado se encuentre fuera del territorio del Estado de Oaxaca, la notificación se realizará conforme a la fracción II de este artículo.

En caso de que no fuese posible citar al imputado según lo previsto en la fracción I y II del presente artículo, las citaciones y notificaciones se harán conforme a lo establecido en la fracción III de este artículo.

Todas las demás notificaciones no contempladas en el presente artículo, se realizarán por estrados o por correo electrónico.

Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, recabando las firmas de quienes participen o intervengan en ellas, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá en términos de Ley, de las penas en que incurrir quienes fallen a la verdad.

Las resoluciones y acuerdos que emitan la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes, durante el procedimiento a la que se refiere este capítulo, constarán por escrito y se asentarán en el registro a que se refiere el artículo 47 Bis de esta Ley.

Para los efectos de este artículo, las autoridades administrativas competentes podrán auxiliarse de las autoridades que estimen pertinentes.

Artículo 70 Bis.- Las notificaciones personales se harán con quien deba entenderse, en el domicilio legal o en el centro de trabajo, o a falta de éstos, en el último domicilio de la persona a quien se deba notificar y que haya señalado para ese efecto, ante la Contraloría, la Auditoría o el Órgano de Control Interno competente. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio legal o el centro de trabajo de la persona a quien se deba notificar y deberá entregar copia del acto que se notifica y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal, a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio legal o en el centro de trabajo, para que el interesado espere en hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio o centro de trabajo se encontrare cerrado, se fijará la cédula de notificación respectiva en lugar visible del domicilio o centro de trabajo, asentándose en el acta respectiva constancia de ello.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere al citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio legal o en el centro de trabajo en que se realice la diligencia y de negarse ésta a recibirla, o en el caso de encontrarse cerrado el domicilio legal o el centro de trabajo, se realizará por cédula de notificación, que se fijará en lugar visible, asentándose razón de tal circunstancia.

Artículo 70 Ter.- Las notificaciones por correo certificado con acuse de recibo se realizarán mediante el envío de la resolución de que se trate, por medio de servicios de mensajería públicos o privados, quienes deberán proporcionar el acuse de recibo a la Contraloría, la Auditoría o los Órganos de Control interno según corresponda.

Artículo 70 Quater.- Las notificaciones por edictos se realizarán cuando se desconozca el domicilio legal del interesado o en el caso de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se llevarán a cabo mediante publicaciones que contendrán un resumen de las resoluciones por notificar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los periódicos o diarios de mayor circulación en el Estado, con un intervalo mínimo de siete días.

En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, o en uno de los periódicos o diarios de mayor circulación en el territorio estatal. Si no son coincidentes las fechas de las publicaciones, se tomará la última efectuada, independientemente del medio que la publicó.

Artículo 70 Quinquies.- Las notificaciones surtirán sus efectos el día en que hubieren sido o se consideren realizadas. Los plazos empezarán a contar a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación.

Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo respectivo.

Toda notificación, excepto la realizada por edictos, deberá contener o acompañarse del texto del acto o resolución que se comunique, así como el fundamento legal en que se apoye y, en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, el órgano ante el cual hubiera de presentarse y el plazo para su interposición.

Artículo 71.- En los procedimientos disciplinarios ante la Contraloría y ante los Órganos de Control Interno, se observarán supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Artículo 72.- Los titulares de la Contraloría y de la Dirección de Procedimientos Jurídicos de esa dependencia, podrán abstenerse de iniciar el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 69 de esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis:

I.-...

II.- Que por una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año, se estime pertinente, justificando la causa de la abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad ni constituyan delito, cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor y el daño causado por éste no exceda de cien veces el salario mínimo diario vigente en el Estado.

Las atribuciones que este artículo otorga a la Contraloría, se confieren en el ámbito de sus respectivas competencias a los Órganos de Control Interno en los Poderes Legislativo y Judicial, en los Órganos Autónomos y en los Ayuntamientos.

Artículo 73.- Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 56 de esta Ley, se produzcan beneficios o lucro personal en provecho del procesado, o se causen daños o perjuicios al erario público y/o terceros, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro personal obtenidos por el procesado, o de los daños o perjuicios causados al erario público y/o terceros.

Las sanciones económicas constituirán créditos fiscales, y se fincarán por la autoridad competente, en los términos que establece el artículo 83 de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 74.-...

I a la VI.-...

VII.- El monto del beneficio, servicio o lucro obtenido por sí o por interpósita persona, o de los daños o perjuicios causados al erario público y/o a terceros, derivado del incumplimiento de obligaciones.

Para los efectos de esta Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable de la omisión, desviación o incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en esta Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a este ordenamiento.

Artículo 75.- Para la imposición y ejecución de las sanciones a que se refiere el artículo 57 de esta Ley, se observará lo siguiente:

I.- La amonestación pública será impuesta por la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes, según corresponda y ejecutada por el jefe inmediato del servidor público sancionado.

La ejecución de la amonestación privada podrá realizarse por la Contraloría, la Auditoría o los Órganos de control Interno, o quien éstos designen; se entenderá con el servidor público de manera personal o por conducto de su apoderado legal, y a falta de éstos, por estrados.

Cuando haya aceptación expresa de la infracción cometida y de la sanción a que haya lugar, tratándose de amonestación privada, esta procederá de plano;

II.- La suspensión o destitución administrativa del empleo, cargo o comisión, será impuesta por la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes, según corresponda, y ejecutada por el titular de la institución pública a la que se encuentre adscrito el servidor público sancionado;

III.- La inhabilitación administrativa para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por la Contraloría, la Auditoría y por los Órganos de Control Interno competentes, según corresponda y ejecutada por el titular de la institución pública, o por quien éste designe, en los términos de la resolución dictada;

IV.- Tratándose de Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos, la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo 57 de esta Ley, corresponde al Congreso del Estado, y respecto a los demás servidores públicos municipales, las sanciones corresponden aplicarlas y ejecutarlas a los Ayuntamientos por conducto del síndico municipal;

V.- El superior jerárquico deberá ejecutar las sanciones administrativas impuestas por la autoridad competente, en los términos previstos en el artículo 78 de este ordenamiento;

VI.- Cuando el superior jerárquico en términos de esta Ley, no ejecute las sanciones administrativas impuestas, la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes, ejecutarán tales sanciones, notificando al superior jerárquico la infracción cometida por la omisión; y

VII.- Las sanciones económicas serán determinadas e impuestas por la Contraloría, la Auditoría y por los Órganos de Control Interno competentes, según corresponda y ejecutadas por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado o a quien competa según su marco normativo.

Cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes, la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes, solicitarán a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado o a la autoridad correspondiente, en cualquier fase del procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 69 de la Ley, que proceda al embargo precautorio de sus bienes, de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida.

Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá en los términos de la fracción V del artículo 57 de esta Ley.

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte del jefe inmediato o del titular de la institución pública a que corresponda la adscripción del servidor público sujeto al procedimiento disciplinario, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley.

Artículo 76.- (DEROGADO).

Artículo 77.- La facultad de iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa contra un servidor público, prescribirá:

I.- En cinco años, tratándose de infracciones consideradas como graves en esta Ley; y

II.- En tres años, tratándose de los demás casos.

El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere cometido la infracción, o a partir del momento en que hubiese cesado, si fuese de carácter continuo.

La prescripción se interrumpirá al iniciarse el procedimiento previsto por esta Ley. Se entiende que se inicia el procedimiento cuando surta efectos legales la notificación a que se refiere el artículo 70 de esta Ley.

El cumplimiento de la ejecución de la sanción es de orden público. La autoridad que, debiendo ejecutar la resolución, la retarde injustificadamente o sea omisa, se sujetará al procedimiento de responsabilidad establecido en esta Ley.

En todo momento, la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control interno competentes, podrán hacer valer la prescripción de oficio.

Artículo 78.- La ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por la Contraloría, por la Auditoría y por los Órganos de Control Interno competentes conforme se disponga en la resolución respectiva. La suspensión, destitución o inhabilitación que se impongan a los servidores públicos, surtirán efectos al notificarse la resolución y se considerará de orden público.

Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se ejecutarán por el titular de la institución pública a que corresponda la adscripción del servidor público sujeto al procedimiento administrativo, conforme a las causales de suspensión, cesación del cargo o rescisión de la relación de trabajo y de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación aplicable.

Artículo 79.- Los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por esta Ley, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los términos que establezcan las disposiciones respectivas.

El recurso de revocación se interpondrá ante la propia autoridad que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva.

La resolución que se dicte con motivo de la sustanciación del recurso de revocación será inimpugnable.

Artículo 79 Bis.- La tramitación del recurso de revocación se sujetará a las normas siguientes:

I.- Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución, debiendo acompañar copia de la resolución y constancia de la notificación de la misma, así como el ofrecimiento de las pruebas supervinientes que considere necesario rendir;

II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso, dentro de los diez días contados a partir del día de la presentación del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución. Las pruebas admitidas se desahogarán en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del auto admisorio, que a solicitud del procesado o de la autoridad podrá ampliarse una sola vez por cinco días hábiles más; y

III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, debiendo notificarla al interesado.

Artículo 80.- La interposición del recurso de revocación, suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si así lo solicita el promovente, conforme a las reglas siguientes:

I y II.-...

Artículo 81.- Las resoluciones que hayan sido recurridas ante la Contraloría, la Auditoría o los Órganos de Control Interno y que hayan sido revocadas o las impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que hayan sido anuladas o modificadas y que causen ejecutoria, ordenarán a la institución pública en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones recurridas o impugnadas, en los términos en que se haya resuelto, sin perjuicio de lo que establecen otras Leyes.

Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia casos en los que la autoridad sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, en los términos previstos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, podrá otorgar la suspensión cumpliendo los requisitos a que se refiere el artículo anterior.

No procederá la suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas que se impugnen mediante la interposición del recurso o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tratándose de infracciones graves o casos de reincidencia.

Las sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, podrán ser impugnadas por la Contraloría, la Auditoría y por los Órganos de Control Interno competentes que corresponda.

CAPITULO III DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS RESARCITORIAS

Artículo 82.- Para los efectos de este Capítulo, incurrir en responsabilidad administrativa resarcitoria los servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales, que por actos u omisiones produzcan daños o perjuicios, o ambos, estimables en dinero, a la hacienda pública estatal o municipal, o a los recursos que administran los Poderes, o al patrimonio de cualquier institución pública, o a los concertados o convenidos por el Estado con la Federación, o sus Municipios, sea por el manejo irregular de fondos o valores de cualquier naturaleza u origen o por los actos u omisiones en la recepción, recaudación, administración, ejercicio, aplicación o pago de recursos públicos.

Artículo 83.- En las responsabilidades administrativas resarcitorias, para obtener las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes a que se refiere este Capítulo, se constituirán y fincarán en primer término a los servidores públicos o a los particulares, personas físicas o morales, que directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado y, subsidiariamente, en ese orden, al servidor público jerárquicamente inmediato que por la índole de sus funciones haya omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos.

Serán responsables solidarios con los servidores públicos, los particulares, personas físicas o morales, en los casos en que hayan participado y originado una responsabilidad administrativa resarcitoria.

Artículo 83 Bis.- Cuando en el procedimiento administrativo disciplinario se haya determinado la responsabilidad del servidor público y que la falta administrativa haya causado daños y perjuicios, se estará a lo dispuesto en este Capítulo.

Artículo 84.- Las responsabilidades que conforme a este Capítulo se finquen, tienen por objeto reparar, indemnizar o resarcir, el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado a la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio de cualquier institución pública, o a los concertados o convenidos por el Estado con la Federación, o con sus Municipios.

Las reparaciones e indemnizaciones económicas que se impongan conforme a las disposiciones de esta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales, se fijarán en cantidad líquida, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y las hará efectivas la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, conforme al procedimiento administrativo de ejecución dentro de los plazos establecidos en los ordenamientos fiscales.

La Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes podrán solicitar a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, la práctica de embargo precautorio en contra de los responsables, para garantizar en forma individual el importe de los pliegos preventivos de responsabilidad, a reserva de la calificación o constitución definitiva de la responsabilidad resarcitoria.

Sin perjuicio de lo dispuesto por este artículo, tratándose de servidores públicos, procederá, en su caso, la aplicación de sanciones disciplinarias en los términos de los Capítulos I y II de este Título.

Artículo 85.- El fincamiento o constitución definitiva de las responsabilidades que regula este Capítulo, será resuelto por las autoridades señaladas en el artículo 3 de éste ordenamiento, a través del procedimiento administrativo que establece el artículo 69 de esta Ley, ya sea que las

confirme, modifique o cancele, constituyendo el pliego preventivo de responsabilidad el acto de inicio de dicho procedimiento.

Artículo 85 Bis.- La Auditoría, formulará a las entidades fiscalizadas los pliegos preventivos de responsabilidad derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública en los que se determinará en cantidad líquida, la presunta responsabilidad de los infractores. Lo anterior, con base en las disposiciones establecidas en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca.

Artículo 86.- Cuando a juicio de la Contraloría se consideren incosteables en la práctica de su cobro, por una sola vez, podrá cancelar los créditos derivados del financiamiento de responsabilidades que no exceden de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Estado.

Artículo 87.- Si derivado del ejercicio de las atribuciones de fiscalización, de investigación, de auditoría, de inspección, de vigilancia, de seguimiento, de supervisión, de control y/o de evaluación resultan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios a la hacienda pública estatal o municipal, o a los recursos que administran los Poderes, o al patrimonio de cualquier institución pública, o a los concertados o convenidos por el Estado con la Federación, o sus Municipios, sea por el manejo irregular de fondos o valores de cualquier naturaleza u origen o por los actos u omisiones en la recepción, recaudación, administración, ejercicio, aplicación o pago de recursos públicos, la Contraloría, la Auditoría o los Órganos de Control Interno procederán a:

I.- Determinar preventivamente los daños o perjuicios, o ambos, según corresponda, y fincar directamente a los responsables las responsabilidades administrativas resarcitorias por medio de reparaciones e indemnizaciones;

II.- Presentar las denuncias a que haya lugar, a través de su titular.

Tratándose de delitos fiscales, cometidos por servidores públicos, la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno según corresponda, darán vista a la Secretaría de Finanzas, del Poder Ejecutivo del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, conozca y lleve a cabo el procedimiento respectivo ante las instancias correspondientes; y

III.- Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos, el ministerio público, previamente a dictar el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, fundando y motivando, dará vista a la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno según corresponda, para el efecto de que estos emitan su opinión jurídica.

Artículo 88.- Cuando el presunto responsable cubra, antes de que se emita la resolución, a satisfacción de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado y de la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes, el importe de los daños o perjuicios, o ambos, causados a la hacienda pública estatal o municipal, o a los recursos que administran los Poderes, o al patrimonio de cualquier institución pública, o a los concertados o convenidos por el Estado con la Federación, o sus Municipios, o a los particulares, personas físicas o morales, sobreseerá el procedimiento resarcitorio, sin perjuicio de las sanciones administrativas previstas en esta Ley.

Artículo 89.- El importe de las sanciones resarcitorias que se recuperen en los términos de esta Ley, deberá ser entregado por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado a las respectivas tesorerías de las instituciones públicas que sufrieron el daño o perjuicio respectivo. Dicho importe quedará en las tesorerías en calidad de disponibilidades y sólo podrá ser ejercido de conformidad con lo establecido en la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 90.- Las responsabilidades administrativas disciplinarias y resarcitorias que se finquen a los servidores públicos a que hace referencia el artículo 2 de esta Ley, no eximen a éstos ni a los particulares, personas físicas o morales, de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando la responsabilidad se hubiere hecho efectiva total o parcialmente, y se fincarán independientemente de las que procedan, con base en ésta y en otras Leyes y de las sanciones de carácter penal que imponga la autoridad judicial.

Artículo 91.- Corresponde a la Contraloría la atribución de interpretar las disposiciones de este Capítulo, facultándosele para dictar las normas procedimentales relativas a la constitución y efectos administrativos de los pliegos preventivos de responsabilidad, previa autorización del titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Artículo 92.- Las atribuciones que este Capítulo otorga a la Contraloría, se confieren en el ámbito de sus respectivas competencias a las autoridades establecidas en el artículo 3 de esta Ley.

TITULO QUINTO

CAPITULO ÚNICO DE LA INDEMNIZACIÓN POR REPARACIÓN DE DAÑOS A CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 93.- El Estado tiene la obligación de responder de los daños causados por sus servidores públicos en el ejercicio de las funciones encomendadas, en los términos del Código Civil para el Estado de Oaxaca. Esta responsabilidad es subsidiaria y sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado cuando el funcionario directamente responsable no tenga bienes o los que tenga no sean suficientes para responder del daño causado.

TRANSITORIOS:

(El artículo primero transitorio, fue observado por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

(El artículo segundo transitorio, fue observado por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

(El artículo tercero transitorio, fue observado por el titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 53, fracciones III y VI, y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por oficio fechado el 10 de octubre de 2013 y recibido en el Poder Legislativo con fecha 11 del mismo mes y año).

Por lo tanto mando que se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Palacio de Gobierno, Centro, Oax., octubre 18 de 2013.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

LIC. GABINO CUE MONTEAGUDO.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

LIC. ALFONSO JOSÉ GÓMEZ SANDOVAL HERNÁNDEZ.

Y lo comunico a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
Tlalixtac de Cabrera, Centro, Oax., octubre 18 de 2013.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

LIC. ALFONSO JOSÉ GÓMEZ SANDOVAL HERNÁNDEZ.

A/C...

NOTA: Las presentes firmas corresponden a las partes no vetadas, por el titular del Poder Ejecutivo, del Decreto Núm. 2055, aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por el que se aprueba la reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, lo anterior, de conformidad con el párrafo primero de la fracción VI del artículo 53, en relación con el artículo 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.